

La gente tiene razón

Reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los tiempos presentes

Julio Ahumada, Carlos Albornoz, Juan Alvarez, Isabel Allende, Raúl Aravena, Claudio Arriagada, Osvaldo Artaza, Gabriel Ascencio, Patricio Astorga, Pepe Auth, Andrés Aylwin, Osvaldo Badenier, Ignacio Balbontín, Héctor Bravo, Humberto Burotto, Juan Bustos, Guillermo Campero, María Eugenia Camus, Flavio Candia, Sergio Carrasco, Hugo Carreño, Juan Carvajal, Pablo Castiglione, Fernando Castillo V., Luis Cisternas, Marcelo Contreras, Ana María Correa, Maximiliano Cox, Raúl de la Puente, Alvaro Díaz, Juan Díaz, Fernando Echeverría, Sergio Elgueta, Alvaro Elizalde, Francisco Encina, Santiago Escobar, Jaime Estévez, Ricardo Fabrega, Ramón Farías, Francisco Fernández, Carmen Frei, Ricardo Ffrench-Davis, Francisco Renán Fuentealba, Hernán Garfias, Roberto Garretón, Manuel A. Garretón, Jaime Gazmuri, Pedro Goic, Jorge González, Rodrigo González, Homero Gutiérrez, Nelson Haddad, Patricio Hales, Clarissa Hardy, Miguel Hernández, Raquel Hurtado, Carlos Abel Jarpa, Juan de Dios Jiménez, Tomás Jocelyn-Holt, Eugenio Lahera, Soledad Larraín, Andrés Lastra, Antonio Leal, Roberto León, Juan Pablo Letelier, Yerko Ljubetic, Pablo Lorenzini, Homero Martínez, Javier Martínez, Gonzalo Martner, Enrique Mellado, Patricio Meller, Lucía Menares, Sergio Micco, Milenko Mihovilovic N., Milenko Mihovilovic O., Jorge Millán, Germán Molina, Fernando Molina, Carlos Montes, Joaquín Morales, Adriana Muñoz, Miguel Muñoz, Jorge Navarrete, Ricardo Núñez, Carlos Olivares, Héctor Olivares, Carlos Ominami, Emiliano Ortega, José Miguel Ortiz, Andrés Palma, Eduardo Palma, Joaquín Palma, Cristian Pareto, Aníbal Pérez, José Pérez, Patricia Poblete, Sofía Prats, Sergio Puyol, Dagmar Raczynski, Eugenio Ravinet, Juan Claudio Reyes, Víctor Reyes, Patricio Rojas, Osvaldo Rosales, María Rozas, Gabriela Ruitort, Giorgio Ruiz, Eduardo Saffirio, Humberto Salinas, Pedro Salvat, Felipe Sandoval, Rodolfo Seguel, Rodrigo Serey, Claudia Serrano, Gianni Signorelli, Ezequiel Silva, Pablo Silva, Ricardo Solari, Laura Soto, Mauricio Soto, Patricio Tapia, Roberto Teplisky, Carolina Tohá, Adrián Torres, Eugenio Tuma, Ariel Ulloa, Gabriel Valdés, Teresa Valdés, Ximena Valdés, Darío Valenzuela, Felipe Valenzuela, Juan Enrique Vega, Sergio Velasco, José Velásquez, Horacio Véliz, Paulina Veloso, José Verasay, Francisco Vidal, Raúl Villagrán, Gonzalo Vio, Roberto Yévenes, Guillermo Yunge, Roberto Zahler, Faride Zerán, Raúl Zurita.

Reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los tiempos presentes

Chile ha vivido tiempos veloces desde que iniciamos el camino hacia la democracia. Las transformaciones producidas en su sociedad son gigantescas. En todos los terrenos. También son enormes las tareas pendientes. Entender y enfrentar los nuevos desafíos requiere tener claro el sentido del camino transitado, el que nos da identidad para elaborar las orientaciones de la acción sobre el presente y el futuro. Es indispensable volver a plantearnos nuestras convicciones e imágenes sobre el país que soñamos. La de vida que buscamos. La sociedad que deseamos.

Hemos avanzado porque hemos tenido buenas ideas, trabajado intensamente y mantenido altos valores éticos. Ese mismo progreso ha creado nuevas obligaciones. Asistimos al término de un ciclo, el que se inició con el triunfo de octubre de 1988 contra la dictadura. Paulatinamente emerge un nuevo ciclo, que plantea tareas nuevas o de envergadura semejante a las que asumimos hace diez años. Porque éstas se han resuelto básicamente bien, hoy tenemos la oportunidad y la necesidad de reflexionar sobre el camino que sigue, para hacer las inflexiones que son indispensables, para conducir el cambio con certeza de sus ventajas y conciencia de sus riesgos.

La Concertación es de la gente. El debate amplio, crítico y libre es indispensable para renovar ese compromiso esencial. La hegemonía cultural que la derecha ha mantenido en Chile ha buscado instalar la mala costumbre de no reflexionar, de evitar que se muestren abiertamente los rostros propios y las identidades elementales. Reiteradamente se elude el debate sobre temas esenciales. Para ello se invocan límites, tensiones, peligros y temores. También realidades, aunque éstas sean sumamente opacas.

Creemos que una sociedad es verdaderamente moderna sólo cuando puede conversar libremente sobre sus éxitos y problemas. Con sinceridad y transparencia. Sin miedos ni amenazas. Cuando la modernidad es

asumida crítica y reflexivamente por las personas que la viven. Cuando ella es vivida cotidianamente como parte de la libertad, como componente del desarrollo de las personas y de la vida social cotidiana. Con sus oportunidades y sus problemas. Para ello, la práctica de la reflexión, el debate y la deliberación democrática son los únicos medios que permiten poner en el centro de la vida colectiva una acción pública de calidad. Ninguna fuerza ni dogma pueden aceptarse como reemplazo de ellos: no puede construirse la modernidad desde el oscurantismo.

Hoy, como nunca, es necesario restablecer el valor de la política como el ejercicio del derecho de todas las personas a participar en el gobierno de su vida social. Como construcción consciente de posibilidades y límites. Recuperar las grandes tradiciones de la cultura nacional; el servicio público como un valor, como una entrega al bienestar del conjunto de la nación; con dirigentes capaces de poner su vista en un horizonte, en un proyecto de país.

Desde hace tiempo se han manifestado, en el seno de la Concertación, opiniones diferentes sobre la interpretación de la historia reciente de Chile, la evaluación de su proceso de transición a la democracia, la situación actual del país y las políticas que se proponen a futuro. Estas diferencias, muchas de las cuales no son nuevas, han representado la riqueza democrática de la coalición.

Nos alegramos de que ahora esas diferencias se orienten hacia un debate más público y sistemático. Creemos que éste es el momento más adecuado para activar este debate, por los hitos que se cumplen y por las decisiones que se nos acercan como Concertación y como país.

En pocos meses se cumplirán diez años desde el histórico Plebiscito del 5 de octubre de 1988. En éste las fuerzas democráticas —derrotando las pretensiones continuistas de Pinochet— abrieron el camino a la reinstalación de la vida republicana y a la formación de los dos primeros gobiernos de la Concertación.

Durante una década la coalición ha sido el principal actor político y social del país. Y todo indica que seguirá siéndolo en el futuro.

La elaboración de un nuevo programa común y la elección de un candidato único que lo represente en las próximas elecciones presidenciales, junto con el leal respaldo al Gobierno del Presidente Frei, serán no sólo las tareas prioritarias del tiempo inmediato, sino, además, las condiciones necesarias para su propia proyección y renovación.

El próximo gobierno que el país elija asumirá ya en el siglo XXI. Su acción será determinante para configurar el rostro de Chile al cumplirse el Bicentenario de la Independencia Nacional.

Este debate es aún más necesario desde la publicación del manifiesto «Renovar la Concertación: la fuerza de nuestras ideas», suscrito por un significativo número de personeros de la Concertación. Es un documento oportuno y bienvenido, que valoramos como un aporte al debate de ideas. Más aún, podemos coincidir con muchas de sus apreciaciones. Sin embargo, él está muy lejos —en lo que dice y en lo que omite— de representar un punto de vista unánimemente compartido. Adolece de excesivo exitismo en su evaluación de lo ya hecho, de errores en su diagnóstico de las causas del malestar que detecta y, sobre todo, insuficiencia en la definición de las tareas futuras.

El «Manifiesto» simplifica las nuevas realidades sociales. La sociedad civil, afirma, hoy es más fuerte que antes y «las desigualdades han empezado a reducirse». Estamos para «entrar en la lista de los países desarrollados». El país respira «un aire de, esperanza», renacen «las variadas manifestaciones culturales y artísticas» y si la gente no lo percibe es por culpa de quienes en la Concertación no son capaces de «reconocer la obra realizada» y transmiten una «imagen de frustración». Esto es lo que «confunde a la ciudadanía». Los

problemas que enfrentamos hoy no deberían preocuparnos porque «son los propios de una sociedad en fuerte proceso de desarrollo». «Es por ello que debemos sostener con firmeza el actual modelo de desarrollo», el cual se describe entusiastamente, como si en la realidad se hubiera logrado establecer una economía y mercado ideal, competitivos y sin distorsiones. Más aún, «cualquier desviación respecto de los elementos matrices de nuestro esquema de desarrollo tendría un alto costo para el país». El que pretenda «desviarse» del modelo «abriría compuertas al populismo».

Llama la atención su insistencia en proyectar la imagen de que se estaría imponiendo una corriente cuestionadora de la maciza obra realizada por los dos gobiernos de la Concertación, descalificando así la búsqueda de un balance maduro de lo obrado que permita, junto con celebrar los logros, reconocer las carencias y asumir los nuevos cambios del país. Nuestro objetivo no es, sin embargo, analizar en detalle el «Manifiesto», aunque de la lectura de lo que sigue pueden colegirse nuestras coincidencias y discrepancias con esa y con otras, posiciones. Lo que buscamos es hacer nuestro propio aporte al debate, el del conjunto de mujeres y hombres que nos hemos reunido para pensar en común y expresar, a través de este documento, el fruto de esa reflexión.

Lo hacemos fieles a dos de las mejores tradiciones de la Concertación: la pluralidad y el espíritu crítico. Pluralidad porque militamos en diferentes partidos, o en ninguno; participamos en diferentes actividades de la sociedad civil y creemos necesario expresar nuestras reflexiones, interpretaciones y puntos de vista como contribución a una política común. Espíritu crítico porque entendemos que la política es para cambiar —a la luz de nuestros valores y principios— los aspectos que nos resultan inaceptables de la realidad social, y no para meramente administrarla ni, menos aún, para limitarnos a constatar y registrar el desarrollo de fuerzas ciegas guiadas por alguna mano invisible.

Nuestro trabajo busca mantener abierto el debate. Junto con algunas certezas básicas, tenemos muchas preguntas que resolver, problemas por comprender, caminos que imaginar. Por ello, nuestro aporte constituye un texto abierto, cuya escritura más definitiva debe seguirse procurando a través del diálogo y la deliberación.

I. La Concertación

La dictadura militar fue más que un paréntesis autoritario en nuestra historia; intentó dar vigencia permanente a un nuevo orden, con un sistema político tutelado, un modelo económico concentrador, una política social excluyente y la hegemonía cultural de los sectores más conservadores de la sociedad.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 significó la pérdida de la democracia y el cierre de una etapa histórica. La dictadura fue mucho más que un paréntesis. Se propuso implantar las condiciones económicas, sociales y políticas para un régimen de «democracia tutelada», de características permanentes y estables, en el cual la soberanía popular estaba sometida a la voluntad de poderes fácticos; una economía concentradora y una sociedad excluyente.

Culturalmente, junto a la sistemática represión en contra de dimensiones libertarias, democráticas y progresistas, de larga tradición en la vida nacional, promovió el establecimiento de orientaciones conservadoras e integristas en lo cultural y neoliberales en lo económico y social. Impulsó la ruptura de los lazos colectivos y de los vínculos cívicos, destruyendo el respeto al otro, introduciendo la imagen permanente de la amenaza, y privatizando los espacios públicos. Instaló el temor, la sospecha, la desconfianza como componentes del quehacer cotidiano. Con altos costos humanos, sociales y políticos, cobrados implacablemente, el nuevo régimen obtuvo logros significativos para sus propósitos. Puso las bases estructurales para un modelo que suponía una inaceptable visión de la sociedad, de los seres humanos y de la ética.

La derecha política y económica, con pocas y honrosas excepciones, apoyó con entusiasmo la dictadura. Más aún, fue gobierno con ella. Asumió su concepción neoliberal de la sociedad. Negó primero —calló o justificó después— la política sistemática de terrorismo de Estado. Frente a la violación de los principios elementales de civilización y decencia, que representan los derechos humanos, fueron prácticamente inexistentes las voces de este sector que se levantaron para pedir su respeto. Fue evidente que entre la defensa de la vida y dignidad humana y la defensa de los privilegios económicos y sociales hicieron una clara opción por estos últimos. Este hecho constituye una vergüenza que tendrá una difícil aceptación ética en la historia presente y futura de Chile, como no la ha tenido en ninguna parte de la humanidad civilizada.

La Concertación nació para impedir ese designio y defender el valor de la gente. El rechazo a las políticas excluyentes de la dictadura y su conducta de violación de valores universales elementales sirvió de impulso para la reunión de fuerzas y actores que deseaban recuperar la democracia. Dentro de la oposición de entonces se perfilaron nítidamente dos estrategias enfrentadas para cumplir este propósito: una que buscaba un camino político, pacífico, de superación de la dictadura; y otra que sostenía la estrategia del derrocamiento por todos los medios, relevando el papel de la «violencia». Ellas involucraban visiones diferentes sobre el diagnóstico, las posibilidades, los límites, las tareas, los medios y los fines de la acción pública. Resultó exitoso el camino político, que se expresó primero en la Alianza Democrática y después en la Concertación. Ese camino fue una definición de principios. Implicó una concepción y una práctica sobre el significado mismo de la política. Rechazó el recurso a los medios violentos y colocó al ser humano como el sujeto de la acción política. Lo político es aquí sinónimo de civilización, tolerancia y capacidad para tejer desde la sociedad misma acuerdos que den soluciones reales a los conflictos habida consideración de convicciones, proyectos, posibilidades y riesgos, consciente y colectivamente asumidos. La política es principios, reflexión y responsabilidad.

Esta visión permitió congregar todas las fuerzas políticas, sociales, culturales y espirituales que querían recuperar la democracia por caminos civilizados. Personas de origen y experiencias diferentes unidas por un deseo común. Miembros de las más variadas organizaciones espirituales, culturales, sociales, sindicales, gremiales, partes del tejido social sobreviviente o reconstruido. Mujeres y hombres de distintas religiones o de ninguna; independientes y militantes de diferentes partidos políticos; tradiciones ideológicas social-cristianas, socialistas, radicales socialdemócratas, liberales. Humanismo cristiano, socialista, laico. Fue una confluencia de acciones sociales intelectuales, políticas, culturales y éticas a las que concurrieron diferentes personas y actores. Jóvenes, ancianos y adultos, generaciones con memorias e historia plurales acerca del pasado reciente. Todos ellos con características, funciones y puntos de vista ideológicos múltiples y diversos.

Sin embargo, con la capacidad y el deseo de construir acuerdos. Al rechazo inicial común a la dictadura, se agregó una elaboración colectiva de sueños, esperanzas, valores, ideas y proyectos para un futuro, que debía ser construido por todos, sin exclusiones, permitiendo la expresión de la voluntad ciudadana, más allá de las amarras de la dictadura. Por sobre el temor y la amenaza sobrevivió el sueño y la esperanza. También la conciencia de los límites y de los riesgos. La Concertación fue así la expresión del movimiento social, político y cultural más amplio y sólido que ha conocido la historia independiente de nuestro país. Un acto no sólo político, sino también social. Una reconstrucción de vínculos sociales perdidos o amenazados. Por lo mismo, un patrimonio común de los demócratas, propiedad no de los partidos, sino de los ciudadanos, en particular de los pobres y sectores medios, de los desprotegidos y discriminados de la sociedad: de la gente.

La Concertación invitó a superar el miedo, permitiendo el triunfo del NO y la derrota del proyecto de prolongar la dictadura.

II. Un primer balance

La participación ciudadana y la negociación de los espacios públicos se asumieron como las únicas vías para evitar una solución traumática de los antagonismos que dividían al país. La acción articuladora de consensos e instituciones que los expresaron, caracterizó uno de los principales aportes para el país de la nueva política democrática. Simultáneamente, con la lucha contra el miedo, la política de consensos se desarrolló pública y colectivamente para evitar riesgos innecesarios y para asumir y resolver los inevitables. Chile se había acostumbrado al lenguaje brutal de la amenaza, de la descalificación, de la exclusión, de las verdades sin discusión, a la arrogancia de los tecnócratas que hablaban en nombre de una ciencia única y verdadera. La tarea de construcción común de espacios públicos, de acciones compartidas y decididas por todos, no formaba parte del ideario de los actores del régimen autoritario.

Culturalmente, nuestra primera tarea fue levantar el miedo de la sociedad a sí misma. La política democrática comprendió que el mayor problema que tenía que enfrentar y resolver para la normalización del país era disipar la sensación de vulnerabilidad de las recién conquistadas democracia y paz social. Evitar el temor de que los conflictos condujeran al caos, a los enfrentamientos, a la ingobernabilidad política y económica; el miedo a las rupturas traumáticas, a entrar en una espiral en que constantemente estuviese amenazada la paz de las familias, el trabajo y la vida pública. Fantasmas que agitaron y representaron permanentemente los políticos y publicistas de la dictadura. La demanda de orden de la sociedad fue la que consciente y deliberadamente fue incorporada en la propuesta democrática. Como convicción y no como simple táctica. Pero se requería más. La aspiración al orden no podía ser tratada sólo como gobernabilidad de los conflictos, sino igualmente como reconstrucción de los vínculos sociales, simetría entre lo subjetivo, el bienestar económico y la diversidad. Esa fue, en definitiva, la mayor promesa de la Concertación: normalizar a Chile como un país de ciudadanos.

Para abordar esta amplia tarea, la coalición buscó sus consensos y los expresó en programas de gobierno. Ellos eran totales y definitivos en torno a la demanda central: democracia auténtica, nacida y sustentada exclusivamente en la soberanía popular, libre de tutelajes y amarres. Eran también importantes en las tareas de reinsertar a Chile en la comunidad internacional, recuperando el honor y la seguridad de la Nación. Asimismo, eran compartidos el recuperar un clima cultural de libertad, solidaridad, tolerancia, ausencia de imposiciones y censuras, de valorización de los bienes simbólicos, culturales y espirituales como parte esencial de la vida de las personas.

En las dimensiones económica y social, los acuerdos iniciales fueron menos comprensivos. Sin embargo, cubrían los aspectos fundamentales propios de un período de recuperación de la democracia: valorización de los mercados competitivos y abiertos, como mecanismo principal de la producción de bienes y servicios económicos, dentro un marco que defendiera los intereses de los consumidores; conservación de los equilibrios macroeconómicos básicos, reducción de la inflación y gasto público sanamente financiado; crecimiento económico fuerte y sostenido; combate frontal a la pobreza y énfasis en la equidad en la distribución de los frutos del desarrollo y de las oportunidades, la integración social.

El país y todos nosotros depositamos una enorme confianza y autoridad en los líderes de la Concertación y del Gobierno. Las tareas programáticas que no llegaron a definirse plenamente, la naturaleza misma de la salida política, el anhelo generalizado de paz y la fuerza de los enclaves, amarres y poderes fácticos se asumieron depositando una gran confianza, delegando de hecho una importante autoridad —y pesada responsabilidad— en el liderazgo que encabezaba la coalición. Primero, en las negociaciones constitucionales con la dictadura derrotada pero poderosa, después en la constitución y dirección de los dos primeros gobiernos democráticos. Confianza y autoridad que superaba con creces a los partidos, alcanzando a la mayoría de la gente. Éstas se expresaron en el respaldo ciudadano, renovado en no menos de seis eventos electorales sucesivos. Este

liderazgo ha merecido y merece el respeto y agradecimiento del país, además del afecto y lealtad de todas las mujeres y nombres de la Concertación. Por cierto cuentan con el nuestro.

La transición tuvo un exitoso resultado en su misión de instalar instituciones y autoridades públicas comunes. Éticamente confiables en su voluntad democrática y de respeto a los derechos y libertades individuales, junto con su capacidad para asegurar el funcionamiento eficaz y exitoso de la economía.

Lo recorrido muestra éxitos indiscutibles: tasas sostenidamente altas de crecimiento, persistente retroceso de la extrema pobreza, control de la inflación, afirmación de libertades civiles y públicas elementales, reconocimiento de la verdad en materia de derechos humanos, funcionamiento de importantes instituciones democráticas y un alto nivel de paz social. El país ha recuperado dificultosamente muchas de sus buenas tradiciones cívicas en un clima que propende a la valoración del diálogo por sobre la violencia y la intolerancia.

Sin embargo, el desacuerdo fundamental con el marco constitucional ha configurado un cuadro muy difícil respecto de las relaciones políticas. Permanentemente, la agenda pública se ve referida a temas que se prolongan desde hace largos años, impidiéndose avanzar en la discusión y resolución de los nuevos desafíos que debe enfrentar el país.

Un problema crítico de nuestra transición a la democracia ha sido las dificultades para hacer efectiva la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Como es público y notorio, ello ha estado varias veces en cuestión durante estos años.

Más importante aún es que, con la definición de su misión y tareas, tal como ellas fueron definidas en la actual institucionalidad, el control del poder civil sobre las Fuerzas Armadas es menor que el compatible con un régimen plenamente democrático.

Reconociendo la gran importancia de la renovación habida en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, es preciso también reconocer que su subordinación a la autoridad política legítimamente constituida no ocurrió ni ocurrirá automáticamente como producto de la transición. Es la definición misma de cuáles son su misión y funciones propias el tema central.

A su vez, la evolución política, económica y cultural del país muestra, también, fuertes y notorias asimetrías entre estas dimensiones provocadas por la persistencia de importantes desigualdades y privilegios. Entre otros hechos, la relación entre crecimiento económico y equidad no aparece satisfactoria para los valores e ideales que han iluminado el mundo político cultural del conjunto de los actores que forman parte de la Concertación. El país presenta altas tasas de concentración del patrimonio y del ingreso, mientras que por otro lado se percibe un estancamiento en las posibilidades de movilidad social y la participación política de numerosos sectores de la población.

Chile actual es, en aspectos muy importantes, radicalmente distinto del Chile que recibió la Concertación. Hay procesos transformadores que aluden a la democracia y la modernidad, pero persisten resabios y atrasos que dificultan la igualdad, la justicia y el funcionamiento pleno de instituciones democráticas. Es un país políticamente normalizado, sin riesgos de involuciones dictatoriales; también es una democracia incompleta. Avanza materialmente, junto con un empobrecimiento de sentidos, de proyectos de justicia. El desarrollo de las dimensiones materiales, políticas y simbólicas de su organización social es asimétrico.

III. Nuestros valores determinan el tipo de modernidad a la que aspiramos

El camino de la modernización no es sólo el del crecimiento económico. Hay que reflexionar sobre el estado actual del desarrollo nacional bajo el prisma de la justicia y la decencia, deteniéndose a enunciar los déficit y desafíos que se deben resolver para seguir avanzando en la construcción de una sociedad que sea económica, política, social, cultural y espiritualmente más avanzada. Debemos preocuparnos de la construcción de una agenda de problemas que debe abordar la acción futura. No sirve mantenerse en la constante autorreferencia a los notables logros alcanzadas.

La cultura democrática ha dejado de cultivar su bien fundamental: el papel e importancia de las ideas y las prácticas que las acompañan. La derecha en cambio se ha preocupado de reproducir e imponer dogmáticamente su modelo ideológico. Por ello ha sido consistente en la defensa de sus privilegios, participando en consensos que no implican mayores riesgos para lo que piensa y representa.

En muchas oportunidades hemos caído en el juego de la derecha creyendo que las cosas están bien porque unos pocos las ven así, aunque un buen número lo pase mal y tenga dudas. En nuestro caso, afirmamos el valor de la cultura humanista, plural y solidaria, que aspira no sólo a la defensa de intereses particulares, sino a una buena sociedad. Reafirmar esta aspiración no es nostalgia ni populismo. Es consecuencia con nuestro origen e historia, que se ha nutrido de la crítica como una palanca positiva de cambios y que ha hecho de la disconformidad un instrumento de innovación, de búsqueda creativa de nuevas posibilidades y caminos. Estas señas de identidad deben servir como sustento para interrogar los malestares y las irritaciones sociales emergentes. Más que negarlas, condenarlas o simplemente justificarlas, la exigencia de una faena que encarna el cambio, es asumirlas y transformarlas en productivas para una vida social mejor. No es aceptable simplificar los problemas de esta sociedad, ni denunciarlos como el resultado de una simple continuación del modelo que implantó la dictadura, ni aceptarlos como el producto natural de los cambios que ha experimentado el país.

El espíritu originario de la Concertación y, por lo tanto, su faena, radicó en la capacidad de construir pacientemente consensos desde una diversidad de posiciones. Desde la pluralidad que representábamos hicimos un paciente trabajo de encuentro. Los consensos que alcanzamos no estuvieron exentos de dificultades.

No es extraño por tanto que en la Concertación exista más de una lectura; incluso la existencia de puntos de vista diferentes y encontrados debería ser la materia prima para la construcción permanente de nuevos consensos. La única ortodoxia de la Concertación es la democracia, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos; la tolerancia, y la lucha por una vida mejor para la gente.

La vitalidad de la Concertación del 2000 estará en la capacidad para construir consensos desde las diferencias, que como ayer no se explicarán solamente por diferentes procedencias partidarias. La realidad abrió la necesidad de mirar el camino recorrido; las elecciones de diciembre fueron una voz de alerta. Nadie en la Concertación puede haber quedado indiferente con lo ocurrido: más de un millón de jóvenes no se motivaron con la inscripción en los registros electorales; hubo un aumento significativo de la abstención y de los votos blancos y nulos. En este cuadro la fuerza que salió más dañada es la de partidos de la Concertación. Esto no se puede pasar por alto.

Complacencia y conformismo son tentaciones que debemos dejar reservadas a la derecha.

La modernidad no es una sola. Tras el debate concertacionista hay maneras diferentes de plantearse frente a la modernidad.

Este debate está en curso en el mundo de hoy. Es el centro de las discusiones políticas en los países más desarrollados. Los cambios gigantescos que ha experimentado el mundo en las últimas décadas son mucho más profundos que los que ve la estrecha mentalidad neoliberal.

En muchos aspectos importantes, estos cambios significan la apertura de nuevas posibilidades y mejores condiciones para elevar la vida de los seres humanos. En otros representan un problema y un riesgo para la existencia material y espiritual. Producto de este desajuste y contradicción, se han generado múltiples malestares de alcance global: malestar con la cultura, con la economía, con la política, con la sociedad; sentimientos de incertidumbre y desprotección.

Entre las causas de estos sentimientos y malestares, está la sensación de que somos parte de procesos cuya orientación y conducción no conocemos, no alcanzamos a percibir; procesos con una dirección automática. Son fuerzas aparentemente invisibles, sin cuerpos ni rostros, sin nacionalidad ni identidad, las que conducen, a toda velocidad, un tren sin rumbo conocido ni mucho menos consciente y colectivamente elegido por los miembros de la sociedad.

Mientras hay más riquezas, más conocimientos, más técnicas, subsiste una distribución inequitativa de las mismas. Entre los diferentes países y dentro de los mismos tienden a constituirse dos realidades: la de los ganadores y la de los perdedores. Paulatinamente ambas se distancian más. La sociabilidad es de peor calidad. Aparecen amenazas para la seguridad física y psicológica. Hay graves desequilibrios ecológicos. Las cosas tienden a adquirir mayor importancia que las personas. Se presentan fenómenos de nacionalismo xenofóbico, violencia urbana y criminalidad organizada, fruto en parte de la erosión de los lazos comunitarios, la pérdida de identidades y pertenencias.

Sin embargo, como nunca antes, el desarrollo de los individuos y su creatividad ofrecen, oportunidades para su libertad, para el desarrollo de su autonomía y su conciencia, para el reconocimiento de su maravillosa y vasta diversidad, para la realización personal en una creciente complejidad, para empezar a liberarse de las limitaciones del pasado.

Estos fenómenos empiezan a generar en muchas democracias una extendida y profunda reflexión de la que no se puede escapar la política nacional.

No hay un único camino hacia la modernidad y es tarea de la política optar.

IV. Una Concertación para el 2000

El cambio de siglo enfrentará a Chile al horizonte de su Segundo Centenario como nación independiente.

Ello no será sólo el cambio de folio en una fecha simbólica, sino una oportunidad para repensarnos como sociedad.

Ella debe ser asumida de manera consciente, con sentido histórico y con una voluntad y humildad críticas, que nos permitan remontar con éxito la agenda que los nuevos tiempos imponen.

1. El sentido de la modernización

La modernidad requiere una actitud abierta, reflexiva, crítica, para construir colectivamente su sentido. El proceso de modernización que el país ha llevado a cabo en las últimas décadas no tiene correlato en la esfera de la cultura y de las mentalidades. Múltiples resistencias explican estos bloqueos. En un contexto de globalización que no sólo afecta los mercados y las comunicaciones, sino también las ideas y valores, las

posiciones conservadoras e integristas levantan lo «tradicional» como un dique de contención al avance de la tolerancia en la sociedad. Se requiere enfrentar la pretensión hegemónica del integrismo conservador —que admite la libertad sólo en el terreno de la economía— para dar paso a una cultura de libertades y derechos.

La Concertación se propuso reorientar a la sociedad chilena hacia su sentido histórico de nación libertaria y democrática. Se debe persistir en robustecer y profundizar los lazos de integración y cohesión social. Proyectar una sociedad donde prime la seguridad y no el miedo, donde se viva el sentimiento ciudadano de pertenencia a una comunidad política; donde se ponga fin a los abusos y se proporcionen oportunidades de progreso y movilidad social a todos; donde se promuevan amplios procesos de participación. Pero por sobre todo, donde se propongan acciones que desarrollen la confianza en la ciudadanía y en sus derechos.

Nuestros propios éxitos y la dinámica de la modernidad han introducido nuevas complejidades en nuestra agenda. Como una paradoja, la realidad se ha hecho más opaca y se requiere mayor lucidez para prever las consecuencias a largo plazo de muchas políticas modernizadoras. Pero hay una parte indeleble en la lección de los años anteriores, y es que la política no puede abdicar a cumplir uno de sus roles esenciales, como es el de las finalidades. Y, para arribar a éstas, no se puede prescindir ni de la reflexión ni del diálogo, porque no hay sentidos únicos ni inequívocos.

Una nueva política requiere partir de las comunidades e identidades sociales. La modernización no puede dejar de considerar los afectos y los sentimientos. En particular no puede prescindir de los recursos y potencialidades que instituciones como la familia poseen para el desarrollo de los seres humanos. El fortalecimiento de la familia requiere crear un marco legal más avanzado que, reconociendo las diversidades que presenta en nuestra sociedad, asegure la protección social y permita el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. Al mismo tiempo se deben enfrentar los obstáculos laborales que reducen el tiempo necesario para la vida en familia y las condiciones de pobreza que degradan su cotidianidad.

Tampoco se puede prescindir de la subjetividad de las personas. Lo que la gente percibe como real es real en sus consecuencias. Se debe actuar responsablemente frente a sus sentimientos de agravio, frustración o desafecto. Hacerse cargo de sus anhelos, dolores y esperanzas. Sin la soberbia que conduce a una modernización acrítica, a una modernización fantasma.

No todo lo que se atribuye a la subjetividad carece de bases objetivas. El sentimiento de inseguridad que invade a vastos sectores tiene fundamentos muy objetivos. En el marco de una economía abierta y de alto crecimiento es inevitable que el país sufra profundas modificaciones en la próxima década, generando efectos simultáneos de construcción y desarticulación social. Y aunque muchos chilenos mejoraron su situación, otros, especialmente aquellos más pobres y vulnerables, perciben el riesgo de perder sus empleos o sus actuales ingresos, de vivir situaciones de cesantía y precariedad. El sentimiento de inseguridad que invade a vastos sectores tiene pues fundamentos muy reales.

La derecha es indiferente a estas realidades y las considera como costos inevitables del crecimiento. No tiene políticas para ellas y sus respuestas son de corte populista, animadas muchas veces por afanes electoralistas. Propone mayores gastos fiscales para proteger sectores y comunidades amenazadas, pero bloquea las necesarias reformas para mejorar la protección de los sectores más vulnerables, o niega su financiamiento a través de la tributación del caso.

2. Desigualdad, privilegios y discriminación

La sociedad chilena está aún marcada por fuertes desigualdades, privilegios y discriminaciones. Además de los éxitos que todos señalamos y reconocemos, también tenemos resultados que se deben considerar negativos o preocupantes. Estudios recientes constatan la debilidad de los vínculos sociales, la desaparición o abandono

de los espacios públicos, el bajo nivel de asociatividad, la privatización creciente de la vida social y, algo fundamental, la consolidación de una desigualdad estructural. Entre las personas, entre las regiones, entre el espacio urbano y el rural, en materia educacional, en salud, en economía, en expectativas, en la distribución de la seguridad. No es sostenible en ese contexto que nuestra sociedad civil sea hoy más fuerte.

La economía chilena vive ciertamente un período excepcional. En la década de los 90 se han completado los ocho años de más alto crecimiento desde que hay cifras; con inflación y desempleo decrecientes y con productividad y salarios en aumento. Por ello, y porque el esfuerzo de gasto social se duplicó en términos reales, entre 1988 y 1998, la masa de compatriotas que viven bajo la línea oficial de la pobreza se ha reducido a la mitad.

Sin embargo, al igual que destacamos los éxitos, también reconocemos las grandes insuficiencias que perduran en el terreno económico y social. Es así que a pesar de la reducción de la pobreza no se logró reducir la heterogeneidad productiva ni la desigualdad social. Ello está estrechamente relacionado con el progreso aún insuficiente en materia de derechos y garantías ciudadanas exigibles por trabajadores, consumidores, usuarios, sectores sociales vulnerables o personas que merecen un medio ambiente libre de contaminación. La consolidación de instituciones democráticas representativas y la ampliación de los espacios de libertad de expresión, no han reducido las excesivas asimetrías de poder entre ricos y pobres, entre capital y trabajo, entre empresas y consumidores, entre hombres y mujeres. Y si ellas no se agravaron aun más se debió a la política social emprendida por los dos gobiernos democráticos.

La restauración esencial de los derechos humanos no ha ido acompañada de una política de activa promoción de estos derechos, y han ido perdiendo énfasis los esfuerzos por reparar en lo posible los efectos de sus atropellos pasados.

El papel de mujeres y hombres en la familia ha cambiado. La fragilidad en los sistemas de protección social y la gran significación del consumo en la vida de las personas conducen a un incremento del trabajo remunerado femenino. Aun cuando han aumentado las tasas de participación laboral de las mujeres, éstas se encuentran entre las más bajas de América Latina. No existen sistemas de amplia cobertura para el cuidado infantil, ni tampoco una cultura de paternidad responsable que asegure una vida familiar equilibrada. Esto dificulta la mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, aumenta la desprotección, la vagancia, la drogadicción de menores, y, en consecuencia, la vulnerabilidad social. Se dificulta así la superación de las condiciones precarias en que vive buena parte de la población. Una cuarta parte de los hogares chilenos son hogares sin padre presente. Los nuevos derechos ciudadanos de las mujeres han contribuido a penalizar la violencia familiar y doméstica.

La modernización productiva no ha sido acompañada por la modernización laboral. Pocas empresas han reducido sus grados de autoritarismo y, por ello, vastos sectores de trabajadores asalariados ven acentuada su carga y fatiga laboral. Asimismo, los encadenamientos productivos que vinculan grandes y pequeñas empresas son profundamente asimétricos en desmedro de éstas últimas. La discriminación laboral y salarial constituye una práctica extendida en Chile. Son pocos los mercados que se han hecho más transparentes, motivo por el cual los derechos de consumidores y usuarios se ven continuamente vulnerados. La esencia de la actual legislación parece resumirse así desde el punto de vista del trabajador: «Si le gusta, bien; si no, puede irse». Adicionalmente, existen enormes desigualdades en el acceso a servicios y bienes públicos, tales como salud, educación, mejoramiento del entorno ambiental y seguridad ciudadana, con grandes diferencias entre campo y ciudad. Muchos chilenos —especialmente, jóvenes, mujeres y adultos mayores— viven incertidumbre y desprotección para enfrentar el futuro. Más aún, la soberbia que exhiben minorías sociales poderosas hace que muchos chilenos sientan atropellada diariamente su dignidad.

Para la derecha es indiferente el origen y los efectos de la desigualdad, pues la considera inevitable y positiva. Para nosotros, en cambio, la libertad e igualdad esenciales de la persona humana son categorías que preexisten al mercado y al Estado, son irrenunciables y deben ser exigibles por todos los chilenos.

Nos queda aún camino por recorrer en materia de libertades de conciencia para todos los credos religiosos de nuestro país, que deben tener los mismos derechos esenciales, sin discriminación de ninguna naturaleza. Es rol del Estado asegurar, ampliar y difundir continuamente esos derechos más allá de la esfera de lo mercantil, facilitando la profundización de la democracia. También estimular un vigoroso desarrollo cultural. En este sentido, una nueva economía sólo podrá emerger en la medida que la lógica de la democracia y los derechos ciudadanos impregne el conjunto de las instituciones económicas fundamentales tales como el Estado, el mercado, las empresas y las redes productivas: sólo así podrá emerger un Chile desarrollado, democrático, con alto grado de equidad social, y tolerante de la diversidad y la diferencia.

Reconocemos el mercado y al Estado como instrumentos básicos de la sociedad moderna, rechazando falsas antinomias. Simplemente estamos conscientes de sus fallas y limitaciones: del mercado, especialmente, en la esfera de bienes públicos tales como la ciencia, la educación, la salud, la seguridad y la previsión social; del Estado en materia de gestión y control ciudadano efectivo.

Las desigualdades y discriminaciones, que aún plagan nuestra sociedad, tienen múltiples orígenes históricos y no pueden reducirse a las tendencias concentradoras presentes en la economía. Estas tendencias deben regularse y canalizarse en su propio terreno, pero todas las demás discriminaciones —tales como las que afectan a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los jóvenes— que no tienen ningún vínculo necesario con el tipo de economía existente, también deben combatirse en sus propios terrenos. Debemos combatir el conservadurismo que se opone a la eliminación de una gran variedad de desigualdades y discriminaciones odiosas.

3. Participación, sociedad civil y desarrollo asociativo

La democracia no puede reducirse a su sola dimensión de régimen político, a la institucionalidad y reglas del juego para que los ciudadanos ejerzan cada cierto período el derecho de definir quién y cómo ejerce el poder ejecutivo y parlamentario, por cuánto tiempo y conforme a qué procedimientos.

La democracia institucional requiere de contrapesos que limiten el poder que la sociedad delega en las representaciones políticas. Ni la soberanía popular ni los derechos individuales pueden ser trasladados completamente al Estado y al sistema político.

El pluralismo es una de las condiciones de la democracia como forma de gobierno y de vida social, y encuentra su lugar de realización principal en la sociedad civil. El Estado es el lugar de lo que se pone en común; la sociedad civil es el lugar de lo diverso. La articulación armoniosa de la unidad y la diversidad es lo que define la democracia como forma de vida y no sólo de gobierno.

La organización y la acción colectiva de la gente al nivel de la sociedad civil y a partir de intereses, necesidades, cultura, identidades o ideas, configura la dimensión social que contrapesa a la dimensión política de la democracia. En Chile observamos un debilitamiento de las formas de asociatividad que predominaron en períodos anteriores: sindicalismo, asociaciones urbanas, campesinas, estudiantiles; y el surgimiento de otras: ambientalistas, de mujeres, de consumidores, de derechos ciudadanos frente a la inseguridad, de oposición a proyectos que afectan a comunidades, regiones o pueblos indígenas; también emergen movilizaciones frente a la intolerancia cultural y persisten referidas a derechos humanos.

El sindicalismo se encuentra en un proceso de reestructuración y no de disolución frente a la disgregación de los grandes colectivos de producción y de servicios al surgimiento de nuevas áreas de actividad, frente a la globalización que introduce exigencias de flexibilidad y competitividad de nuevo tipo. Lo mismo ocurre en el mundo urbano y, en menor medida, en el campesino, pero con ritmos más lentos y menos claridad.

Los partidos y el Estado tienen una responsabilidad en crear las condiciones para que se desarrollen las formas de acción y organización colectivas, así como los procesos de transición y adaptación de las antiguas expresiones de la sociedad civil. Ello es condición del pluralismo y de la necesidad de que la sociedad juegue su rol de contrapeso de limitación del poder estatal, del poder de la tecnocracia, del poder del dinero, de los intereses corporativos privados y públicos e incluso del poder de sus propios representantes políticos. No es aceptable la idea de que la gente «vota» en el mercado, o participa a través de la sola información individual o de puras manifestaciones privadas. Ello sólo tiene sentido si, al mismo tiempo, existen los espacios colectivos y públicos para agregar demandas y hacerlas traducibles a su procesamiento político.

El Estado fue determinante en la historia reciente de nuestro país en la conformación y el fortalecimiento de los grupos económicos privados. Sería incomprensible que hoy, con la justificación ética que no existió en el caso anterior, no mostrara similar o mayor decisión para apoyar y fortalecer sus indispensables contrapesos en la sociedad civil.

4. La revalorización de la política y de la confianza pública

La aspiración a la democracia tiene como base la convicción de que ésta constituye el sistema más apto para compatibilizar libertad política, crecimiento económico y desarrollo social. Ello ha sido uno de los ejes de la conducción concertacionista del gobierno.

Sin embargo, de manera creciente, la política se aleja de su misión fundamental de representación de la gente.

En la desafección ciudadana por la política existe un enorme escepticismo sobre lo que ella promete y una desilusión por la pérdida del sentido de comunidad. Esto se ha definido como el malestar democrático.

Las indispensables capacidades técnicas no bastan para una adecuada conducción de la sociedad; es necesaria una ética del compromiso democrático, que supere una simple concepción contable del funcionamiento de la democracia. Las decisiones en materia gubernamental son técnicas y políticas al mismo tiempo. En torno a ellas es necesario reconocer que el disenso social, expresado en intereses, visiones y valores contradictorios es consustancial a la existencia de una sociedad de iguales. La democracia no implica homogeneidad social ni eliminación del conflicto, sino el predominio de procedimientos institucionalizados para solucionarlos: el diálogo, la negociación, la capacidad de los actores políticos de concertarse entre sí y generar consensos básicos para el funcionamiento social, bajo el principio de un ahorro drástico de todos los recursos de fuerza. Estas capacidades dependen de la cultura del país, antes que de sus potencias tecnológicas o financieras.

Hoy, las principales amenazas a la democracia provienen tanto de la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de influencias, como de la falta de fundamentos valóricos que legitimen la existencia del disenso y la oposición política como elementos centrales de las reglas del juego.

Pero sin confianza y responsabilidad de los actores políticos las sociedades modernas no funcionan.

Ambas son bienes simbólicos cuya producción y existencia debe estar asegurada por el funcionamiento sano del sistema político. Ellas dependen de la transparencia, la información, la distribución equitativa de cargas y derecho: políticos, la certeza y rutina en los sistemas de evaluación y control, la existencia de espacios

públicos de comunicación y, fundamentalmente, de la frecuencia, intensidad y calidad de los intercambios entre los grupos dirigentes.

También es necesario recordar que la ética no es una exigencia sólo para el sector público; también lo es para el sector privado. No debe olvidarse que tras cada funcionario público corrupto, casi siempre hay un interés privado que lo corrompió.

La sociedad chilena está aun muy lejos de alcanzar estos objetivos de manera satisfactoria. Hay un enorme camino que recorrer para transformarlos en la realidad objetiva del funcionamiento de nuestra institucionalidad.

5. Democracia plena como tarea todavía pendiente y el valor de las instituciones

Es un hecho que la gran mayoría del país está en desacuerdo con aspectos fundamentales de la Constitución que hoy nos rige. Esos desacuerdos se refieren, entre otras materias, a la institución de los senadores designados, la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional y del Consejo de Seguridad Nacional, el sistema electoral binominal, y el cercenamiento de facultades presidenciales relativas a los cuerpos armados que forman parte del listado. Ese desacuerdo lo ha expresado reiteradamente la ciudadanía.

Primero, con el triunfo del NO en el Plebiscito de 1988 que, en esta materia permitió la negociación de un paquete mínimo de reformas constitucionales cuya falta habría hecho simplemente imposible el funcionamiento institucional. Pretender que la aprobación de esas reformas constituiría una aceptación tácita de las normas objetables cuya modificación no fue posible obtener entonces, es una falsificación histórica que desmienten los pronunciamientos de la ciudadanía después, a través de las mayorías absolutas obtenidas por la Concertación en todas las sucesivas elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales que han tenido lugar.

Mientras no exista un marco constitucional que represente un amplio acuerdo, o en su defecto la decisión de la mayoría ciudadana, seguirá careciendo de la necesaria legitimidad la institucionalidad política y, por ello, también las bases del sistema económico y social. Así lo han entendido, por lo demás, los sectores más lúcidos de la propia oposición y las fuerzas políticas que hoy no tienen representación parlamentaria.

Ni la obstinación de la derecha dura, ni la resistencia de los poderes fácticos, ni el supuesto acostumbramiento por el simple paso del tiempo, nada nos hará desistir de estos objetivos que son de la esencia misma de nuestra identidad como Concertación.

Debemos romper el bloqueo, fruto del artificial empate político que consagra la actual Constitución. Las instituciones son substanciales para el juego democrático. No existe ni estado de derecho ni igualdad ciudadana sin instituciones. Sin embargo, existen conductas políticas que les dan un significado simplemente instrumental. Las instituciones, además de reglas, son valores. La tendencia a su uso puramente instrumental introduce la fuerza, la arbitrariedad y la incertidumbre. Conduce a equilibrios precarios en el plano político, y mantiene latente el uso de los recursos más potentes para imponer la voluntad de unos sobre otros en el reino de la anarquía.

Es innegable que Chile tiene un déficit institucional. Como un rezago obstinado que viene desde la época dictatorial, no hemos podido ni sabido desarrollar y afirmar muchas de nuestras instituciones. Esto no es solo un problema de los enclaves autoritarios y de la carencia de un acuerdo constitucional. Tiene que ver también con el concepto mismo que la transición manejó acerca de la normalidad institucional. Ante situaciones de tensión, muchas de nuestras instituciones perdieron pie e, impelido por la responsabilidad política, el gobierno

se creyó obligado a negociar situaciones reñidas absolutamente con un funcionamiento normal y en forma de una democracia moderna.

Desde una perspectiva histórica ello es comprensible. Pero no lo es el hecho de que la ciudadanía no tenga una información transparente sobre el tema, que le permita juzgar la convicción y la responsabilidad de cada uno de los actores políticos involucrados en el tema. Una normalidad institucional como ésta es un fundamento precario para el desarrollo de nuestra democracia.

6. La transparencia social: el pluralismo en los medios de comunicación social y en el espacio público

En democracia no deben existir temas de importancia pública vedados al conocimiento de la gente. La transparencia, además de una condición ética, es una necesidad práctica sin la cual el control democrático no puede ser ejercido de manera real. Sin ella, una parte sustantiva del poder ciudadano queda eliminado.

Los controles democráticos deben producirse con información y comunicación al interior del sistema político y desde éste hacia la sociedad. No cualquier información o comunicación, sino aquella que instala un equilibrio informativo y provee los elementos de juicio que hacen posible una decisión ciudadana con comprensión y conocimiento. No es una información interesada. Es una información puesta en la sociedad para un uso igualitario por parte de la ciudadanía.

En una sociedad como la nuestra, donde el acceso al conocimiento de lo político y de la propia creación cultural está mediatizado por una élite cerrada o por monopolios informativos, la transparencia está severamente limitada. Chile está sometido a una presión de este género, que deja a sus ciudadanos en calidad de meros consumidores o espectadores de una política aparente, convocados cada cierto tiempo a la validación de lo que no se ha dicho. Precisamente porque la ciudadanía comprende que hay cuestiones de fondo que no se dicen públicamente la desconfianza encuentra alimento.

Hay aquí una ruptura potencial del sentido de pertenencia. El logro de la transparencia de la política y de la información es una tarea fundamental que debe ser acometida.

7. Gobernar el mercado

La conservación de los equilibrios macroeconómicos es condición necesaria de gobernabilidad del país, su crecimiento económico sostenido y el desarrollo de una política social eficaz. Entre ellos, es fundamental que el gasto público sea financiado con impuestos permanentes y no con emisión de dinero o con endeudamiento excesivo. Tampoco es una política correcta —como propone reiteradamente la derecha y las cúpulas empresariales— financiar gastos corrientes con ventas de activos públicos. Sin embargo, dentro de rangos técnicamente admisibles, las políticas macroeconómicas y sectoriales admiten opciones. No basta con afirmar la voluntad de mantener el ritmo de crecimiento económico: hay que tomar decisiones sobre el tipo de desarrollo que Chile necesita. Por ejemplo, con el mismo énfasis con que defendemos el equilibrio entre gasto público y tributación, sostenemos enfáticamente que el nivel de ambas variables no es un asunto meramente técnico, sino que debe representar preferencias de la gente, expresadas a través del sistema político democrático. Por tanto, no sólo es legítimo sino necesario discutir y proponer alternativas de gasto y tributación para el período posterior al actual Gobierno. No es un tema académico, sino responsabilidad política. Es obvio que es necesario gastar mejor los recursos Hoy disponibles; más que un desafío técnico, es una obligación ética y política, especialmente en beneficio de los pobres de Chile; sin embargo, no basta proclamarlo, sin proponer concretamente cómo eso se haría.

Una de las funciones económicas del Estado moderno es la regulación del correcto comportamiento de los mercados desde el punto de vista de su eficiencia competitiva.

Por lo general, los mercados libres son económicamente eficientes; pero existen unos pocos, pero muy importantes, que requieren una regulación externa, en la cual el rol del Estado es insustituible. Es el caso de mercados que afectan bienes esencialmente colectivos, como la calidad del medio ambiente; mercados en que la falta de regulación puede comprometer gravemente la fe pública, como es el caso del financiero; mercados con gran desequilibrio de información y poder de negociación del comprador y del vendedor, como AFP, Isapres, seguros y otros que operan con «contratos de adhesión»; en los que existe concentración monopólica, cuando ella no es posible de corregir abriendo esos mercados a una mayor competencia, incluso internacional; por último, mercados nacionales afectados por serias distorsiones en el comercio internacional.

Otra de esas funciones es la corrección de las desigualdades extremas en la distribución del ingreso que pudieran resultar, y de hecho resultan, de la simple operación de los mercados, tanto de bienes y servicios como de factores productivos, en función de los criterios éticos que se expresan a través de un sistema político democrático.

En este último, la esencial igualdad de los seres humanos se expresa en la máxima «una persona, un voto»; mientras en los mercados se expresa, por definición, la máxima «un peso, un voto». También en esto debe evitarse todo populismo.

En el largo plazo, una mejor distribución de los ingresos no proviene de medidas efectistas, sino de acciones que lleven a una efectiva igualdad de oportunidades. Entre ellas son especialmente importantes las que se refieren a la extensión, la calidad y sobre todo la equidad de la educación a todo nivel.

Una tercera función de la política económica es la de buscar reducir las diferencias de desarrollo productivo entre sectores de actividad, tipos de empresas y regiones, que muestran demasiadas diferencias de productividad y remuneraciones. Es necesario potenciar las iniciativas de la gente emprendedora de todas las regiones, solidarizar con quienes enfrentan cambios y reconversiones como consecuencia de la apertura a mercados cada día más globales, y ayudar a los sectores más atrasados a incorporar tecnologías modernas y a abrirse a mercados nuevos.

Es falso que exista un dilema entre sostener el alto ritmo de crecimiento económico y avanzar hacia niveles superiores de equidad. Por el contrario, estos últimos son una condición necesaria de la estabilidad política, el desarrollo económico y la paz social.

Frente a una derecha que subestima las debilidades estructurales del actual modelo económico, afirmamos que es posible y necesario superar sus evidentes vacíos y deficiencias.

Eso supone del Estado un rol económico activo, que no es lo mismo que un gran tamaño. Salvo situaciones muy excepcionales, si hay una adecuada regulación en el sentido ya explicado, no es necesario ni conveniente que el Estado ejerza actividades productivas. El tema de las empresas públicas debe ser analizado en sus méritos propios, caso a caso, lejos del ideologismo desenfrenado de la derecha, para la cual las privatizaciones son ya un reflejo condicionado, vengan o no vengan al caso.

8. Cooperación, innovación y competitividad

Los cambios que todos los chilenos notamos en nuestra vida cotidiana en este final del siglo XX son considerables. Hay en marcha una revolución tecnológica que está modificando la base material de la sociedad. Las nuevas tecnologías de información y comunicación están transformando radicalmente la industria, la minería, la agricultura y sobre todo la esfera de los servicios. En el transcurso de la próxima

década, amplios segmentos de la sociedad chilena experimentarán enormes transformaciones en sus modos de vivir y trabajar.

Una nueva economía está emergiendo y ella cuenta con el potencial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, una nueva sociedad está emergiendo, con una estructura etaria diferente, una participación creciente de las mujeres, con una población más y —reforma educacional mediante— mejor educada.

Nada impide que, en el transcurso de los próximos veinte años Chile sea un país desarrollado, democrático y con una equidad substantivamente mayor a la prevaleciente hoy en día. Sin embargo, nada asegura una evolución económica «naturalmente» positiva ni menos exenta de turbulencias. Por eso las decisiones políticas son fundamentales.

Existen grandes obstáculos que entran el desarrollo nacional, impiden la apertura de oportunidades y dificultan el acceso de ciudadanos de menores ingresos —así como de quienes viven en regiones— a los beneficios que ofrecen la globalización, las nuevas tecnologías y el crecimiento.

Entre los principales riesgos que Chile enfrenta se destacan el desorden que podría generar una globalización mal asimilada y que impidiera la gobernabilidad democrática del proceso de cambios. Otro peligro es que se reproduzca una espiral de modernización desigual. En este contexto, la heterogeneidad y la desigualdad se expresarán en una sociedad de dos velocidades, compuesta por los que acceden a los beneficios de las nuevas tecnologías y están protegidos de sus turbulencias, mientras que otros están excluidos y viven en la permanente inestabilidad y precariedad. Un tercer peligro es la fragmentación de la cooperación y la solidaridad, así como la profundización de las tendencias de alienación individual y atomización social. Un cuarto peligro es que el Gobierno sea carcomido por presiones provenientes de un populismo de derecha o de izquierda, como de comportamientos tecnocráticos insensibles a la ciudadanía e incapaces de construir consensos, acuerdos y compromisos nacionales.

La derecha defiende modelos históricos atrasados de la empresa, que no serán capaces de competir en el futuro. En efecto, desconfía de la cooperación entre empresas, defiende a ultranza enfoques autoritarios y paternalistas, una flexibilización en detrimento de los derechos del trabajador, así como políticas represivas contra los sindicatos, favoreciendo la discriminación contra la mujer y los jóvenes.

La Concertación debe promover en Chile un modelo de empresa que hoy se extiende en el mundo como la auténtica empresa moderna, en la que se dé mayor participación a los trabajadores, los incorpore a la innovación, a la creatividad y al trabajo en equipo. Empresas en donde se genere mayor motivación, se les trate como socios, con sueldos dignos, con acceso a una educación permanente, y respetándoles sus derechos de asociación y negociación.

Especial apoyo requieren y merecen las empresas pequeñas y medianas.

El crecimiento económico en el Chile de los noventa se ha enriquecido con una amplia gama de empresas que han sabido, con ingenio y creatividad, asumir el desafío exportador. Lo anterior se ha dado paralelamente con la expansión de grupos económicos, cada día con mayor control por empresas transnacionales, los que se diversifican en forma horizontal, controlan numerosas firmas y dominan encadenamientos productivos. Estos grupos realizan planificación estratégica de inversiones, diversifican áreas de influencia, coordinan múltiples empresas, funcionan sobre la base de eficientes organizaciones empresariales, desarrollan una internacionalización creciente y tienen una poderosa influencia en la vida nacional. Puede resultar paradójico constatar que, cuando más proliferan los discursos simplistas y apologeticos sobre la economía de mercado, que suponen el reino de la «mano invisible», haya emergido una poderosa economía de comando privado, que

planifica y asigna recursos con elevada autonomía del Estado, conformando una verdadera «mano visible» que coordina segmentos importantes de la economía nacional y sus incursiones en el exterior.

Los grupos económicos representan una doble dimensión: por un lado, son un factor de crecimiento, de progreso técnico y de competitividad internacional. Por otro lado, algunos constituyen la expresión de poderes fácticos, opacos a la sociedad, débilmente controlados por accionistas minoritarios, trabajadores, consumidores o reguladores. En algunos casos, su origen histórico y el activismo ideológico de quienes los dirigen ha determinado un profundo distanciamiento con respecto a los gobiernos democráticos.

De esta forma, la transición democrática no sólo confronta la importante tarea de terminar con los enclaves autoritarios, sino de resolver adecuadamente la convivencia de la democracia política con una economía dominada por grandes corporaciones privadas. Esta problemática no puede ser resuelta en el discurso general de la relación del gobierno con los empresarios o el sector privado. Los grupos económicos de mayor o menor tamaño constituyen una figura institucional demasiado relevante como para ser diluida en este tipo de discursos que, o desconocen su existencia, o simplifican sus efectos y consecuencias. Hacia el futuro, las claves de la resolución de este desafío son la *transparencia*, la *regulación*, la *confianza* y la *cooperación*.

Transparencia porque la sociedad, es decir accionistas, trabajadores, consumidores y ciudadanos, en general, requieren conocer las acciones y el comportamiento de grupos económicos que, siendo privados, involucran, múltiples actores y por lo tanto derechos y obligaciones que se establecen y practican en el campo de lo civil e involucran, por lo tanto, nuevos desafíos de ciudadanía y nuevas formas de articulación de la sociedad civil, especialmente de sus integrantes más vulnerables y atomizados.

Regulación, porque sus dinámicas afectan derechos ciudadanos, incursionan en sectores en que predominan grandes empresas monopólicas y, frecuentemente, ejercen influencias inaceptables sobre los procesos de formación de la opinión pública y los procesos políticos, a través de formas agresivas de "lobby" y prácticas de financiamiento electoral, todo lo cual requiere un marco institucional altamente desarrollado, eficaz, que aún no existe en el país, o sólo existe parcialmente.

Confianza y cooperación, porque se requiere superar cismas históricos entre empresarios y gobierno para fortalecer una colaboración efectiva que ciertamente será beneficiosa para la nación chilena en el marco de una auténtica economía social de mercado.

En definitiva, es el país como tal el que compete en una economía cada día más globalizada. Su armonía interna es un factor clave de nuestra competitividad internacional.

9. El Estado al servicio de la gente: modernización y descentralización

Para nadie es un secreto que el Estado que la democracia heredó de la dictadura militar era absolutamente incapaz de abordar una modernización solidaria en el país. La reforma del Estado de Pinochet fue el producto de una pura racionalización presupuestaria, desprovista de todo criterio ordenador que permitiera el desarrollo armónico de las funciones y responsabilidades de una economía abierta, en un contexto de crecimiento con equidad. Superposición de funciones, responsabilidades diluidas, áreas no cubiertas y un agudo deterioro técnico y laboral, además de una espectacular brecha salarial con el sector privado, fueron los rasgos más notorios del diagnóstico al momento de arribar la democracia.

Pero también existió un firme convencimiento de que entre las prioridades iniciales estaba introducir modificaciones importantes en las estructuras gubernamentales, salvo las estrictamente necesarias para avanzar en la consolidación democrática y en la solución los problemas más urgentes. La tarea de la modernización se asumió como un compromiso de acciones graduales e incrementales.

Lo realizado desde entonces ha sido significativo, a través de un esfuerzo consistente por desarrollar una institucionalidad moderna y eficiente, con reglas del juego transparentes, que permitieran la expresión de los intereses sociales.

Sin embargo persisten enormes problemas.

Hay áreas de la administración central donde prácticamente no se ha avanzado. La concentración espacial en la Región Metropolitana hace inviable el desarrollo armónico del país en su conjunto, desaprovecha la rica diversidad de nuestras regiones y, además, hace cada día menos tolerable la vida privada y social de los propios santiaguinos.

El Estado chileno requiere culminar su democratización y descentralización, abriendo paso a una profunda reestructuración para superar despilfarros e ineficiencias, para fortalecer sus capacidades de acción y para responder a las necesidades concretas y cotidianas de la gente.

Se deben aumentar progresiva y razonablemente los recursos disponibles para el Estado. Es indispensable mejorar las remuneraciones, el nivel de educación, las condiciones de trabajo y los incentivos a los empleados públicos, garantizando también una gestión que asegure servicios de alta calidad para los ciudadanos.

V. La cuestión principal: la ciudadanía y sus derechos

No son presuntas ni «ortodoxias» ni «desviaciones» respecto a un particular «modelo económico» las que definen el eje principal de las opciones de la Concertación hacia los próximos años: son las decisiones que debemos tomar para avanzar hacia una sociedad más democrática, menos desigual, más segura, más transparente y confiable.

El desarrollo social no es una mera consecuencia automática del crecimiento económico. Librada a su sola lógica nuestra sociedad puede ver crecer peligrosamente sus desequilibrios, de sigualdades e injusticias. Porque la Concertación es la expresión política de la gente, la defensa de los ciudadanos frente a los poderes fácticos, sean de la política, la economía, la información o la cultura, es su causa principal e irrenunciable. El logro de notables avances en la modernización económica del país jamás puede hacernos olvidar eso.

Junto con alcanzar una democracia plena, la elevación de la calidad y cantidad de los derechos a que da lugar la ciudadanía chilena serán nuestras tareas principales en los próximos años. Manteniendo y mejorando el desempeño económico del país, el principal desafío histórico de Chile es mejorar radicalmente su ciudadanía social: la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente, la justicia. La elevación de los estándares de ciudadanía social no es sólo un imperativo ético: es también la base para un desarrollo económico efectivamente sólido y sostenido. La competitividad en el mundo de hoy está estrechamente asociada al desarrollo humano de las poblaciones.

No es el decidido impulso de la modernización lo que está en discusión: es el tipo de modernidad a la que aspiramos: a una sociedad con sentido de identidad y pertenencia; sin privilegios ni discriminaciones; en una permanente corrección de sus desigualdades; con un desarrollo asociativo que permita la interlocución equilibrada entre los distintos intereses sociales; con una política transparente y representativa; con instituciones legítimas, consensuales y confiables; con mercados libres y eficientes regulados por el elemental interés público.

Valoramos a la gente, confiamos en ella, respetamos sus sentimientos. Si la gente tiene insatisfacción, no tenemos derecho nosotros de estar tan satisfechos. En lugar de cuestionar la objetividad de su malestar, buscamos comprender sus sentimientos y canalizarlos.

Más aún, creemos que la gente tiene razón: la cuestión principal es la calidad de nuestra vida colectiva. Es a estas dimensiones que se refieren las insatisfacciones que manifiestan los chilenos con respecto al rumbo que llevamos. Y en lugar de negar las insatisfacciones, vemos en ellas una fuerza que nos impulsa a la innovación. A seguir avanzando.

Si los firmantes de este documento recordamos la génesis e historia de la Concertación, no es por nostalgia de tiempos mejores, sino porque en ellas se encuentran claves de nuestra identidad más profunda. Si hacemos un balance franco de las etapas cumplidas, no es para lamentarnos de que no hemos podido, sabido o querido hacer aún, sino para que —valorando lo mucho que hemos hecho, y hecho bien— lo tomemos como el nuevo punto de partida de nuestros nuevos desafíos.

Asumir los desafíos del momento es la tarea a la que llamamos a la Concertación. Orgullosos de nuestro pasado, leales con nuestro presente, alegres por el futuro al que marchamos.

Santiago, Junio de 1998.

Fuente: La gente tiene razón, reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los tiempos presentes, junio de 1998.
En: Carlos Ominami, **El debate silenciado**, LOM, Santiago, 2009, páginas 39 a 66.